

EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA GUERRILLERA EN COLOMBIA 1964-1981¹⁶

Jorge Eduardo Buitrago Pinzón¹⁷

Julián Valencia Gaitán¹⁸

Analizar la racionalidad de la organización rebelde implica comprender la evolución de su pensamiento estratégico, desde la priorización de la acción política -eje estructural para acceder al poder-hasta la plataforma para realizar las transformaciones planteadas en su proyecto revolucionario. En este sentido, es necesario examinar la coyuntura nacional e internacional que inspiró y posibilitó el desarrollo de la lucha armada y el posterior surgimiento de las FARC.

El ámbito global estuvo caracterizado por la influencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se mantenían enfrentados por el dominio ideológico, territorial y económico en una

16 Capítulo de libro vinculado al proyecto de investigación “Las relaciones y fenómenos del redimensionamiento de las FARC y su posicionamiento estratégico en la Comunidad Internacional”, del grupo de investigación “Masa Crítica” de la Escuela Superior de Guerra.

17 Magíster en Relaciones y Negocios Internacionales, con estudios de especialización en Gerencia en Comercio Internacional, y pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Cuenta con más de seis años de experiencia profesional en el sector Defensa. Se desempeña como investigador, en equipos especializados para el análisis geoestratégico y la construcción de escenarios prospectivos. Sus principales líneas de investigación están enfocadas hacia el análisis geopolítico regional, la seguridad hemisférica, así como, el estudio de fenómenos y amenazas, que desafían al Estado colombiano. En la actualidad cursa maestría en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra y se incorporó a la línea de investigación: Estrategia Geopolítica y Seguridad Hemisférica del Departamento de Estrategia.

18 Magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y politólogo de la Universidad de los Andes. Vinculado a temas de investigación y análisis del sector Defensa por más de cuatro años, sus líneas de investigación abarcan la Teoría Política y las Relaciones Internacionales, enfocado especialmente en estudios regionales, la inserción geoestratégica de poderes hemisféricos en Latinoamérica y los retos de Colombia en relación a fenómenos de criminalidad transnacional. Actualmente colabora con varios grupos de investigación académica y procesos de creación de escenarios y prospectiva.

dicotomía entre capitalismo y socialismo. Para comienzos de la década de 1960, ya se presentaban signos evidentes de “distensión”, en buena medida impulsados por una decidida reorientación de política exterior soviética con Nikita Krushev. La coexistencia pacífica basada en el temor al apocalipsis nuclear parecía encontrar un camino, mientras la última zona fronteriza en disputa se cerraba con la construcción del Muro de Berlín en 1961 y la instalación del emblemático “teléfono rojo”, que conectaba directamente Moscú con Washington para evitar malos entendidos que pusieran en riesgo a la humanidad (Garzón, 2016).

En el escenario continental se daba un proceso de expansión del pensamiento socialista mediante el fortalecimiento de los partidos comunistas y la difusión del pensamiento “gramsciano”, que contribuyó a desarrollar la corriente marxista crítica atenta a lo nacional y popular, al plantear la diferencia entre una política de toma del poder de Estado por el partido de vanguardia, y otra de construcción de hegemonía en la que la lucha cultural era un componente primordial (Coraggio, 2014).

Así, la llegada al poder del movimiento guerrillero ‘26 de julio’ en Cuba, se transformó en un desafío estratégico a la hegemonía de los Estados Unidos, ya que de esta forma el socialismo se constituyó en una realidad palpable en el hemisferio occidental, modificando de manera significativa los lineamientos estratégicos de un segmento importante de la izquierda y la forma de hacer política por parte de los sectores populares en América Latina que, con la consolidación de figuras icónicas de la revolución facilitaron el eco a lo largo de la región. Esta situación coincidió además con el fin del colonialismo clásico europeo que dio paso a emergentes proyectos de liberación nacional en las antiguas colonias no sólo del Caribe sino de Asia y África. A esto se sumó la exitosa experiencia de la lucha armada en Vietnam, la Gran Revolución Cultural Proletaria en China, y las movilizaciones de la segunda mitad de los años sesenta, que tuvieron inicio en el mayo francés, extendiéndose por Europa occidental, particularmente hacia Alemania, Italia, Checoslovaquia, y España, hasta llegar al continente americano en México, Brasil, Argentina y Uruguay, estableciendo así la vía insurreccional como el objetivo y la forma de lucha dominantes desde aquel momento (Sader, 2006).

El carácter exitoso y novedoso de estos procesos revolucionarios registrados a nivel mundial, conformaron un contexto favorable para la lucha insurgente y la aparición de un conjunto de intelectuales críticos que con sus aportes, dieron un efecto extendido de posibilidad a la acción política mediante la formulación de un proceso de formación que rompió con las concepciones existentes (Langieri, 2013).

Una de las cuestiones centrales de los sesenta y primeros años del setenta, es que la lucha armada como eje de la acción política se constituye en el centro del debate de la nueva izquierda. Así, el proceso revolucionario logra poner en diálogo las diversas fuentes ideológicas y políticas: el marxismo, el nacionalismo, el trotskismo, el cristianismo, el peronismo y el anarquismo, generando gran impacto en los partidos comunistas y en las corrientes socialistas que empezaron a ver posible la toma del poder.

Las experiencias del fenómeno son diversas y complejas, caracterizadas por la exclusión política que impedía canalizar cualquier inquietud de participación política, debido a que los sectores más reaccionarios y conservadores fueron clausurando las vías democráticas institucionales con la instalación de gobiernos dictatoriales en el Cono Sur.

Durante las décadas de 1960 y 1970, se vivió de manera sistemática y estratégica un proceso de militarización, con la irrupción de gobiernos de facto asociados a un tipo específico de autoritarismo, el cual utilizó como acto político de expresión la forma del “golpe de Estado”. Este periodo inició con los golpes militares en Brasil y Bolivia de 1964, seguidos por otros similares en Argentina en 1966 y 1976, en Bolivia nuevamente en 1971, y en Chile y Uruguay en 1973, marcando grandes transformaciones en la estructura política y económica de la región, teniendo como característica central tanto la puesta en marcha de severas reformas al Estado, como también el despliegue de una política represiva sobre amplios sectores de la sociedad civil (Victoriano, 2010).

A las corrientes marxistas tradicionales se suma la Teología de la Liberación, con arraigo en sectores intelectuales y de dirigentes sociales a partir de las Comunidades Eclesiales de Base, incorporando cristianos laicos a un proyecto de liberación en un continente cristiano. Se trataba de un verdadero trabajo cultural y político anti dictatorial, pero también contra la violencia de la pobreza, tomando partido por los sectores populares.

Sin embargo, esta encrucijada permitió que sectores militares disidentes de los procesos dictatoriales impulsaran la ideología nacionalista como una de las fuentes del proceso revolucionario, mediante proyectos nacional-populares. Emerge entonces en el panorama continental un conjunto amplio y heterogéneo de fuerzas políticas que buscaron replicar a escala regional, de manera más o menos mecánica, el modelo revolucionario, conduciendo al desarrollo de una fuerte oleada de organizaciones

guerrilleras a lo largo del continente, nutridas de la expansión del intelectualismo marxista y sus vertientes interpretativas.

Surgen así ciclos guerrilleros de corte rural como las Fuerzas Armadas de Liberación Popular (FALP) de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú, Colombia y Bolivia. En otros casos estos movimientos de tendencia de izquierda surgieron bajo modalidades urbanas, como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) en Uruguay, Los Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) en Argentina, y Acción Libertadora Nacional (ALN) en Brasil, que pusieron en el centro de su quehacer político el accionar armado, estableciendo focos guerrilleros que pretendieron catalizar el ascenso de las luchas populares, lo cual se expresó en la aparición y movilización de nuevos actores sociales como los pobres urbanos, en la rearticulación de la protesta agraria y en la radicalización de la movilización obrera y estudiantil (Goicovic, 2015).

Mientras tanto, en América Central, a lo largo de los años setenta -en particular durante la segunda mitad-, se dieron ciclos de lucha armada que iniciaron en Nicaragua sobre una base social predominantemente campesina e “informal” urbana, cuya victoria con la Revolución Sandinista en 1979, alentó la extensión de procesos similares en Guatemala y El Salvador. No obstante, estas fueron asediadas y la gran mayoría derrocadas con la aplicación de una devastadora política de contrainsurgencia impulsada por Estados Unidos con la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso, que buscaba contener el impacto del ideario soviético en la región. Esta política contrainsurgente se extendió durante los gobiernos de John F. Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford y James Carter, configurando de manera multilateral el apoyo en Estados claves en cada zona para sostener el equilibrio regional contra el comunismo.

Bajo ese escenario internacional -la confrontación este-oeste, los triunfos revolucionarios en China y Cuba, y la escisión sino-soviética-, Colombia comenzó a verse influenciada por el discurso comunista propio de la época. Surgen así nuevas fuerzas políticas identificadas con movimientos de izquierda, de la mano con el surgimiento del movimiento guerrillero, situación a la que se sumaba el carácter excluyente del acuerdo bipartidista conocido como ‘Frente Nacional’, lo que permite comprender los estallidos de violencia que tomaron mayor fuerza después de un breve periodo de pacificación.

El principal poder hemisférico de la región -Estados Unidos-, observaba con preocupación a Latinoamérica y la creciente influencia comunista en ella, que tenía a su principal exponente a pocos kilómetros de su territorio: en Cuba. La administración de John F. Kennedy tenía como prioridad la región latinoamericana luego de haber concluido en un gran porcentaje la reconstrucción de las naciones industrializadas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y de monitorear con cuidado los procesos de descolonización en Asia y África.

Para el capítulo, latinoamérica, la política exterior estadounidense se casó con la hipótesis de intervención institucional para ayudar a crear Estados estables y ligados con el modelo de desarrollo capitalista que alejaría definitivamente la sombra de influencia comunista en una región que el gobierno estadounidense entendía como su área natural de influencia (Rojas D. M., 2010).

La trazabilidad de esta estrategia estadounidense en Colombia puede ubicarse en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958 -1962), pues el país fue uno de los principales receptores del programa conocido como ‘Alianza para el Progreso’ (APP), básicamente porque Lleras era reconocido internacionalmente como uno de los anticastristas más radicales de la región, así como por su afinidad personal con el presidente estadounidense John F. Kennedy. En el año 1960, el presidente colombiano fue invitado a intervenir ante el congreso estadounidense para apoyar las tesis de la política exterior del gobierno de turno, haciendo especial énfasis en la importancia que tenía Estados Unidos como modelo de sociedad y aliado fuerte contra la amenaza que representaba el comunismo en Latinoamérica, en especial Cuba y las ideas que desde allí tenían un altavoz para toda la región (Lleras, 1960). Así pues, Estados Unidos tenía como modelo de política exterior la implantación de instituciones estatales programadas para reproducir los valores democráticos y liberales en contraposición al autoritarismo y control estatal que proponía el comunismo.

Por ende, 1961 fue un año decisivo para la puesta en marcha de la APP. En agosto de ese año fue dado a conocer por primera vez el contenido y fines del programa mediante la ‘Carta de Punta del Este’, llamada de esta manera por el lugar donde se hizo la firma por parte de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos de la declaración conjunta (17 de agosto de 1961). En esta carta, los gobiernos de la región se comprometían a implementar las reformas necesarias para alcanzar el desarrollo económico y social bajo el modelo establecido desde Washington. Más tarde ese mismo año, en el mes de diciembre, el mismo presidente

Kennedy hizo una visita oficial a Colombia como muestra de compromiso con los nuevos retos de su política exterior, y dando una imagen de eficiencia temprana al inaugurar un ambicioso proyecto de vivienda para familias de bajos recursos y programas de cooperación para la educación, en lo que actualmente se constituye como la localidad de Kennedy de Bogotá.

Aunque la APP tuvo un inicio vigoroso en la región, especialmente en Colombia, muy pronto los errores de diseño de esta política dieron muestra de debilitamiento, dejando ver sus falencias y la poca distinción cultural que hicieron los creadores del programa para Latinoamérica. El “*Latin American Task Force*”, *thinktank* creado para este fin, veía a la región como una gran masa homogénea con los mismos problemas e intereses, por lo que el programa tenía los mismos matices en los distintos países latinoamericanos (Rojas D., 2010). Aunque la APP estuvo vigente durante casi todos los gobiernos del Frente Nacional, en Colombia tuvo una derrota temprana al nacer dos de las principales guerrillas con una marcada influencia comunista en 1964, y a nivel regional con la elección del presidente comunista Salvador Allende en Chile en 1970, sin mencionar que para ese mismo año Rojas Pinilla perdía las elecciones presidenciales por un porcentaje menor al 1.6%, con un discurso abiertamente antiestadounidense, anti intervencionista y con matices claramente nacionalistas y populistas (Bushnell, 2007, p. 315).

En medio de este agitado contexto, en 1961, el Partido Comunista Colombiano declaraba durante la celebración del IX Congreso su intención de aplicar la tesis de “la combinación de todas las formas de lucha” para la toma del poder, justificándose en su marginación política en las ciudades y la represión militar en el campo de batalla. Esta tesis no sólo sustentaría el nacimiento de las FARC, sino que en la práctica además significó apoyar sindicatos en el ambiente urbano y grupos de autodefensa en las zonas rurales (Pécaut, 2008, págs. 30-35).

La resolución política del Congreso del Partido Comunista expresaba que:

“La revolución puede avanzar un trecho por la vía pacífica. Pero si las clases dominantes obligan a ello, por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el pueblo, éste puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada, como forma principal, aunque no única en otro periodo. La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha” (Pizarro, 1991 Las FARC de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, 1991, pág. 172).

Hubo grandes discusiones al interior del Partido Comunista y entre algunos intelectuales de izquierda sobre el papel de las autodefensas campesinas que, si bien representaban una forma de resistencia al poder del Estado, no tenían una vocación política ni militar clara, criticando la actitud pasiva frente a los grandes problemas de desigualdad rural del país. Es así como estas comunidades debían ser encausadas por el camino de la conciencia de clase y la colectivización de la tenencia de tierra, además de dejar clara la vocación expansionista del movimiento y el uso sistemático de la violencia apoyado bajo parámetros políticos marxistas que darían legitimidad a la pretensión de acceder al poder. Así pues, era imprescindible transformar los grupos de autodefensa campesinas en frentes guerrilleros con un papel estratégico y móvil para la coaptación de nuevos territorios (Debray, 1967, pp. 4 - 10).

Es en este momento que el marxista se convierte en el discurso dominante de los sectores intelectuales que empiezan a pensar la realidad colombiana en clave de condiciones objetivas para la revolución, y aunque este pensamiento no era extraño dentro de la izquierda política, durante los años sesenta se vio reforzado por todo un constructo académico resultante de la proliferación y consolidación de facultades de ciencias sociales, tanto en universidades públicas como en privadas. Los problemas de exclusión, pobreza y desigualdad eran evidentes, y no era extraña la vinculación de las capas medias y altas de la sociedad con movimientos sociales que exigían una transformación social urgente, justificando incluso la combinación de todas las formas de lucha (Aguilera Peña M., 2010, p. 48).

Es interesante ver cómo, mientras mejor se entendía la naturaleza de la desigualdad estructural creada por las principales casas políticas colombianas, mayor cobertura y acceso a la educación universitaria existía, en un proceso de concientización permeada por el marxismo cultural. A pesar de haber un consenso entre la izquierda intelectual sobre la gran dependencia histórica y relacionamiento asimétrico entre Colombia y Estados Unidos, existieron grandes escisiones entre la interpretación soviética y maoísta del marxismo para llevar a cabo la revolución armada en Colombia, situación acorde a las grandes desconfianzas y enemistades que surgieron entre las dos potencias comunistas y que influyeron en sus países satélites, creando micro divisiones entre los nuevos grupos guerrilleros que se fueron creando.

En Colombia se entendía a las guerrillas como la vanguardia de la lucha de clases y los movimientos sociales, algo pregonado continuamente por las FARC en la periferia agrícola del sur del país y reproducido por centros de pensamiento dominados por intelectuales de izquierda, así como por el Partido Comunista, cuyo papel como avalador de la política de acción violenta era evidente. El constante

trabajo discursivo del proceso revolucionario surtió efecto entre intelectuales que posteriormente pasarían a ser parte de los grupos guerrilleros, vinculando especialmente a la juventud comunista de corte soviético, con las FARC. Mientras las condiciones objetivas eran palpables e indiscutibles -en términos de exclusión económica y el acceso a las tierras productivas-, las condiciones subjetivas, o dicho de otra forma, el trabajo político e ideológico necesario para iniciar una revolución armada viable, quedó en manos de las élites intelectuales de izquierda que poco a poco irían ambientando un proceso social que apoyara masivamente una insurrección armada (Arango, 1984, pp. 38 - 41). Este proceso subjetivo sería mucho más eficiente por parte de agrupaciones como el ELN e incluso del M-19, que se tendieron con más ansias sobre este trabajo ideológico.

Con una estrategia político-militar definida, la década de los años 60 fue sin duda una gran oportunidad para revivir el tema agrario. Olvidada la ambiciosa reforma agraria que pretendía corregir las desigualdades en el acceso y utilización de las tierras en los años 30 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, este tema se vio revitalizado durante el primer gobierno frente nacionalista de Alberto Lleras Camargo. Se llegó al punto donde se convirtió en una prioridad y casi en una obsesión, por las problemáticas que ya empezaban a recrudecerla violencia en el campo, ya no desde unas perspectiva partidista y de violencia de bandoleros, sino como una transición de campesinos en una estructura de autodefensa, a organizaciones guerrilleras moldeadas y organizadas por el partido comunista (Bushnell, 2007, pág. 330).

El regreso al país del General Rojas Pinilla con un proyecto evidentemente populista y nacionalista -herencia fortalecida de su exilio en la España franquista-, trataba de aumentar su capital político con la población excluida de los procesos de desarrollo del país, principalmente población pobre y con una estructura política poco definida, además de líderes políticos disidentes de los principales partidos, liberal y conservador, que forjaron una fuerza política paralela al acuerdo entre las élites gobernantes del periodo del Frente Nacional (Villamil, 2015, pág. 18).

La reforma agraria, por medio del Instituto Colombiano de Reforma Agraria -que se creó para tal fin-, pretendía lograr dos objetivos: devolver a una gran masa de campesinos al campo para apoyar los procesos relativamente exitosos de los productos agrícolas colombianos y evitar el aumento de las periferias empobrecidas en las principales ciudades, y a la vez impedir el empoderamiento de estas capas sociales por medio de discursos populistas y anti-establecimiento que promulgaba

la Alianza Nacional Popular (ANAPO), en cabeza del recién llegado y renovado políticamente, Rojas Pinilla.

Y aunque en los primeros años de la década del 60 las organizaciones guerrilleras no eran un problema evidente, el problema agrario impulsó el descontento y desconfianza de los campesinos pobres y sin tierra. Se crearon vínculos de cooperación con organizaciones comunistas que veían en esa coyuntura un impulso para iniciar una revolución armada con un perfil soviético en Colombia, por parte de las que serían las FARC, y por otro lado con una extracción primordialmente urbana por parte del ELN, apoyados directamente por la recién constituida revolución cubana de Fidel Castro y guiada por la doctrina reformista religiosa de la teología de la liberación (Alvarez, 2001, pág. 168). Con respecto a estos nuevos fenómenos de violencia social rural, muchas de las agremiaciones de terratenientes -como la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC)- que aún respondían a la lógica del poder político vinculado a la tenencia de la tierra, crearon los obstáculos suficientes para que la reforma agraria nunca se completara satisfactoriamente, dejando intacta la debilidad estructural del campo desde la década de los años 30.

Para ese entonces, las FARC aún no existían como tal, como menciona Pécaut:

“eran una agrupación de hombres que venían peleando desde la época de la violencia y que no se habían acogido a las políticas de armisticio de los gobiernos de Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo, y que, además, habían resistido los continuos ataques a las zonas de influencia comunista, que después de tener una tradición de ‘colonización armada’ y ‘columnas de marcha’ se consideraron grupos de autodefensa campesina organizadas por el partido comunista” (2008, pág. 23).

La presión política y la oleada de ataques guerrilleros ocurridos entre 1962 y 1963, originaron la decisión presidencial de Guillermo León Valencia (1962-1966) de atacar los enclaves comunistas. Inicia así la aplicación de la fuerza militar, ejecutando el denominado Plan LASO (*Latin America Security Operation*) de la mano del desarrollo de acciones cívico-militares, con el propósito de “ganar la confianza de la población rural, sin la cual la verdadera pacificación era imposible” (Bushnell, 2007, pág. 321).

En los primeros años de la década de 1960, en Colombia ya se encontraban bajo control e influencia comunista regiones como Marquetalia, El Pato, Río Chiquito, Guayabero, Sumapaz y la región del Río Ariari, ubicadas en los Departamentos de

Cundinamarca, Meta y Tolima. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las guerrillas comunistas generaban un clima de violencia e inestabilidad sociopolítica permanente. Las zonas donde se habían asentado las guerrillas, las llamadas “repúblicas independientes”, habían perdido control casi total del Estado (Olave, 2013). En consecuencia, con el fin de evitar su posible desarrollo y extensión, bajo el liderazgo del senador conservador Álvaro Gómez Hurtado (1962 – 1966), se propuso la necesidad de atacar preventivamente este fenómeno y recuperar el monopolio del Estado allí.

La acción militar más importante para recuperar el control del Estado sobre estas “repúblicas independientes” ocurrió en Marquetalia el 27 de mayo de 1964. Como resultado, aparecen nuevos núcleos guerrilleros en el centro occidente de Colombia, entre las cordilleras Oriental y Central, principalmente en Natagaima, Chaparral, Ariari y Sumapaz, convirtiéndose en una guerrilla móvil con la celebración en 1965 de la conferencia del “Bloque Sur”, que asumió el “Programa Agrario de las Guerrillas”. Dos años más tarde, en 1966, con la orientación más visible del Partido Comunista, se convocó otra conferencia, que dio como resultado la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que expresaba ya cierta tendencia hacia una estrategia más ofensiva: eran 300 hombres repartidos en seis frentes (Rosero Trejos, 2011).

De esta forma, en medio de la violencia bipartidista y la conflictividad campesina, las FARC hunden sus raíces históricas en su estrategia de autodefensa “considerando los núcleos campesinos en armas sobre todo como un apoyo” (Pécaut, 2015, pág. 25), subordinadas “inicialmente a partir del problema agrario y luego, con sentido más englobante, como una vía de resistencia con el propósito de transformar la sociedad” (Moncayo, 2015, pág. 13) a partir del derrocamiento y sustitución de las élites políticas dominantes.

Así, con la realización de la Primera y Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur en 1965 y 1966, se define con claridad la orientación táctica y estratégica de las FARC en cabeza de Manuel Marulanda y Ciro Trujillo como segundo al mando, adoptando según Jacobo Arenas (Molano, 2015) la estrategia de “movilidad absoluta y total de las guerrillas y no aceptación de una guerra de posiciones”. Se crea así la necesidad de distribuir fuerza en áreas determinadas, planteamiento realizado en 1969 durante la Tercera Conferencia y desde la que se esbozan “los lineamientos que encauzarían al movimiento hacia una mayor organización de masas, educación, propaganda y finanzas” (FARC-EP, 2016). La creación de la escuela de “formación ideológica” en la Cuarta Conferencia de 1970, sirvió para la construcción del futuro

desenvolvimiento de los frentes guerrilleros, reflejado en la ofensiva que al final de la década del setenta permitió el inicio de la expansión de su accionar hacia las periferias demográficas y territoriales del país.

A la par del crecimiento de esta nueva violencia organizada e ideologizada, la crisis política del país aumentaba y se ponía en riesgo la eficacia del pacto del Frente Nacional. Los cuestionamientos al pacto se hicieron más agudos con la entrada a escena de la ANAPO y otros grupos políticos que influyeron con éxito en la política nacional de la época. Tal fue el caso del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) liderado por Alfonso López Michelsen, hijo del ex presidente López Pumarejo y quien irónicamente también recién llegaba de su exilio político por sus continuas críticas al gobierno dictatorial de Rojas Pinilla en los 50's o década de 1950's.

López Michelsen, a pesar de tener una ascendencia evidente en el Partido Liberal, se mostraba bastante crítico del presente del partido y la exclusión política que habían forjado (Randall, 2007, pág. 203). Sin embargo, tal exclusión no era tan evidente en la práctica, de hecho, no era extraña la vinculación de facciones comunistas en las listas del partido liberal que participaron sin éxito en las contiendas políticas. Incluso el impulso político del MRL languideció a mediados de los años 60, cuando hubo un acuerdo programático entre López Michelsen y el Partido Liberal, lo que dejó el movimiento sin su líder natural, y su facción más radical se decidió por apoyar lo que en esa misma década se dio a conocer como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por otra parte, en el partido conservador en los años 70, el General Rojas Pinilla participó por la presidencia bajo el auspicio del partido, a pesar de tener un movimiento político propio (Bushnell, 2007, p. 307).

Mientras los últimos años de la década de los sesenta transcurrían, las guerrillas urbanas y campesinas se consolidaban en los principales centros académicos del país, a la par de la cooptación territorial de la frontera agrícola del suroriente de Colombia. Las primeras operaciones militares en contra de la insurgencia organizada durante el gobierno del presidente León Valencia, les había servido como mitos fundacionales a la vez que creaban un hito de resistencia y romanticismo revolucionario en las ciudades. No obstante, la izquierda seguía siendo un movimiento minúsculo que estaba lejos de lograr una gran ofensiva armada o tener opciones reales de llevar a cabo un proyecto político creíble. A pesar de esto, la izquierda tuvo éxitos relativos en instituciones claves para su proyecto programático relacionados con la restitución de tierras y las centrales sindicales, en un esfuerzo por mantenerse vigentes en ambos contextos.

Así pues, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada durante el gobierno del presidente Lleras Restrepo, instauraron fenómenos inesperados para la política del país: mientras la asociación en un principio fue vista como un apoyo al papel del Incoder y un facilitador de los procesos políticos y administrativos a nivel nacional, con el pasar de los años esta misma asociación primordialmente gubernamental, pasó a ser un bastión de líderes de izquierda y una plataforma de apoyo a la revolución armada, situación que hizo perder su legitimidad entre muchos campesinos que estaban más interesados en obtener títulos de propiedad rápidamente o mejorar las condiciones de producción de sus predios bajo una lógica plenamente mercantil, lo que chocaba con la propaganda colectivista y estatista que promulgaban los líderes de la asociación. Situación similar ocurrió con algunos grupos sindicales que la izquierda quiso influenciar dentro de su proyecto político sin el éxito esperado (Bushnell, 2007, p. 330).

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) por ejemplo, tenía un arraigo históricamente liberal desde sus inicios bajo las directrices de López Pumarejo dentro de la revolución en marcha de su gobierno, mientras la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) tenía un vínculo estrecho con el partido conservador y sobre todo, con la facción jesuita de la Iglesia Católica, que deseaba organizar las fuerzas laborales católicas del país. A pesar del tradicionalismo político dentro del movimiento obrero nacional, es imposible negar la influencia comunista que empezó a impregnar a los sindicatos, (Mora, 2016, pág. 122). En 1964 nace la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) con un proyecto delineado directamente por el Partido Comunista, que empieza a tener importancia en la sindicalización masiva en Colombia y la pretensión de unificar a los sindicatos, sin embargo, esto solo ocurrirá parcialmente hasta los años ochenta.

Se puede afirmar entonces que durante las décadas del sesenta y setenta:

La lucha armada no tuvo una particular visibilidad en la escena nacional, debido al confinamiento de los grupos guerrilleros en zonas periféricas y al carácter incipiente de dichas organizaciones, tanto en el plano político como en el militar. Igualmente, la marginalidad de la guerra durante este periodo es explicable en buena medida por la política reformista del Frente Nacional. En efecto, pese a las restricciones democráticas sobre las cuales se erigió, la alianza bipartidista habilitó canales institucionales para la movilización social y para ampliar la competencia política en los ámbitos local y regional que servían de válvula de escape a los radicalismos. (Grupo de Memoria Histórica (2013, pág. 127)).

De hecho, es sólo a partir de la Sexta Conferencia en 1978, que surge la necesidad de pasar de las áreas guerrilleras a una organización clandestina de actividad política, impulsada por el proceso de expansión ideológica de la izquierda durante esa época y la movilización de sectores excluidos, que motivaron a muchos jóvenes de clase media y popular a hacer parte de los grupos insurgentes, los cuales eran reclutados a través de redes con presencia en universidades, donde era común la presencia de fuertes movimientos de izquierda radical (Duncan, 2015). Con frecuencia, fue más radical y sectario el discurso en el mundo sindical urbano que en el rural, facilitando la implantación sólida de núcleos obreros, estudiantiles o profesionales de clase media, dispuestos a acoger planteamientos revolucionarios.

Así, la lógica de la organización ha confluido entre objetivos políticos delineados en la lucha de clases marxista-leninista y la necesidad de auto-sostenimiento financiero, en medio de un modelo de economía liberal que les ha permitido desarrollar vínculos de poder sobre el territorio y la población. Para este fin se han valido de la combinación de los lineamientos básicos del “Modelo Insurreccional” derivado de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917 y el de la “Guerra Popular Prolongada” planteada por Mao Tse Tung en China.

A la luz del pensamiento estratégico de las FARC, de acuerdo a Aguilera Peña (2013, pág. 88 y 89), el primer modelo preveía el uso de diversas formas de lucha. En el campo político se haría mediante una fuerte actividad de frente unido y la organización de un partido político revolucionario, mientras que en el militar, se concentraría en la guerra de guerrillas, de movimientos y eventualmente, sin ser fundamental, de posiciones. Por otro lado, el segundo modelo buscaba a partir de la organización de redes urbanas, y la aproximación de las fuerzas rurales a los centros urbanos, desarrollar una fuerte y planificada insurrección general, cuyo estallido sería simultáneo a una gran ofensiva guerrillera sobre Bogotá. De manera que, en la Séptima Conferencia realizada en 1982, se diseñó la estrategia de formulación política dentro del contexto de una situación revolucionaria y de insurrección popular, configurando su centro de despliegue estratégico en la Cordillera Oriental, desde donde se direcciona la parte armada hacia el objetivo principal, que consiste en involucrarse en el torrente de la acción popular como medio para alcanzar el poder (FARC-EP, 1982).

En síntesis, tanto el crecimiento de los movimientos revolucionarios en Colombia, como la respuesta estatal a esta nueva forma de violencia, respondieron a una lógica internacional, donde los grandes poderes internacionales que monopolizaban la política exterior, exigían un actuar determinado a sus aliados. De

esta forma, la política exterior de la Unión Soviética y China, incluida su escisión y crisis, moldearon el carácter y naturaleza de los movimientos guerrilleros en Colombia y la región, en tanto la respuesta estatal a estos nuevos fenómenos de violencia rural organizada, tuvo como camino las directrices internacionales dictadas por Estados Unidos, en un contexto donde éste desempeñaba un papel de hegemon regional absoluto. Así pues, programas de poder blando como la Alianza Para el Progreso (APP) y respuestas de poder duro como el plan LASO (*Latin America Security Operation*), se vieron claramente desarrollados en el país, en un momento donde la crisis de lo rural era evidente y la creciente urbanización de la sociedad nacía con las problemáticas heredadas de la violencia política y la ausente reforma agraria, lo que a la larga dispondrá el camino a nuevos fenómenos de violencia ligados al narcotráfico y el despojo de tierras en décadas posteriores.